

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM**

**LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE
TRANSIÇÃO II**

L514

Legislação, Direitos Humanos e Justiça de Transição II [Recurso eletrônico on-line] organização I Congresso Internacional de Justiça e Memória (I CIJUM): Universidade de Itaúna - Itaúna;

Coordenadores: Graciane Rafisa Saliba, Lilian Nassara Chequer Miranda e Clenderson Rodrigues da Cruz - Itaúna: Universidade de Itaúna, 2023.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5648-923-0

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Enfrentando o legado das ditaduras e governos de matriz autoritária.

1. Direito. 2. Justiça. 3. Memória. I. I Congresso Internacional de Justiça e Memória (1:2024 : Itaúna, MG).

CDU: 34

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM

LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO II

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia

no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la misma, es preciso atender una mirada trífrente. Esto es, que es necesario abordarla desde el enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar

Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y peligrosa, en un lugar común.

Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia (Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y Panamá.

O DEVIDO PROCESSO LEGAL COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ACESSO À JURISDIÇÃO

DUE LEGAL PROCESS AS A MEANS OF ENFORCEMENT OF THE PRINCIPLE OF ACCESS TO JURISDICTION

**Giovanna Oliveira de Melo Alves
Clenderson Rodrigues Da Cruz**

Resumo

Objetiva-se demonstrar a importância da estrita observância do devido processo legal como forma de efetivar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tem-se que acesso à justiça democrática não encerra com possibilidade de submeter ameaça ou ofensa de direito a jurisdição, mas com garantia de participação no caso. Faz-se necessária compreensão do Estado Democrático e dimensão das garantias processuais constitucionais, além de desenvolvimento de estratégias para efetivação destas garantias. Conclui-se que acesso à justiça materializa-se com possibilidade de propositura da ação perante a jurisdição e instauração de procedimento que observa garantias constitucionais do processo, cujo corolário é o devido processo legal.

Palavras-chave: Devido processo legal, Normas processuais, Inafastabilidade da jurisdição

Abstract/Resumen/Résumé

The aim is demonstrate the importance of strict observance of due legal process way of implementing the principle of non-defeasibility of jurisdiction. It clear that access to democratic justice doesnt mean possibility submitting a threat or infringement of rights jurisdiction, but with guarantee of participation in case. It is necessary to understand the Democratic State and dimension of constitutional procedural guarantees, addition to developing strategies implement these guarantees. It concluded that access justice materializes with the possibility of bringing an action before the jurisdiction and establishing procedure observes constitutional guarantees of process, the corollary of which is due legal process.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Due process, Procedural standards, Indefeasibility of jurisdiction

GT 1 – Estratégias legais e práticas adotadas para promover a justiça de transição após regimes autoritários

1. Introdução

Durante o período de ditadura militar, que perdurou de abril de 1964 à março de 1985, diversas questões foram excluídos da apreciação do Poder Judiciário, sendo que a sociedade passou a lidar com a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e fundamentais e perseguição aos opositores do regime. Naquela época, não havia amplo acesso a jurisdição¹ e prevalecia a vontade da Autoridade em relação as demandas sociais. Pode-se citar como exemplo, o art. 7º do Ato Institucional n. 1 de 09/04/1964, que suspendia a estabilidade e vitaliciedade dos servidores públicos pelo prazo de 6 meses, e em complemento, seu respectivo parágrafo quarto, que impedia o controle judicial do mérito de eventual demissão ou dispensa, podendo ser analisado tão somente questões formais. Ora, permitir o acesso à jurisdição, mas condicionar a análise a matéria prefixada é o mesmo que não garantir o acesso.

Em resposta ao período autoritário, a Constituição Federal de 1988 instituiu o Estado Democrático de Direito, a divisão das funções de estado e um exuberante rol de garantias e direitos fundamentais, dentre elas a inafastabilidade da jurisdição.

Contudo, na mesma dinâmica das ondas renovatórias de acesso à justiça², o constituinte preocupou-se mais em permitir que o sujeito de direitos busque a jurisdição para solucionar eventual conflito, do que estabelecer meios democráticos que permitam o sujeito direito construir democraticamente a solução, uma extensão lógica do acesso à justiça e uma concretização da proposta democrática no período pós-ditadura.

Com efeito, tem-se como premissa desta pesquisa que a garantia fundamental de acesso a jurisdição pressupõe a observância estrita do devido processo legal durante todo o procedimento, com o intuito ultrapassar o acesso à Justiça como mera propositura da ação, para permitir que o jurisdicionado possa construir democraticamente a solução da demanda.

¹ Na linha de Fabrício Veiga Costa faz-se a opção do uso da expressão acesso à jurisdição à acesso à justiça, por acreditar-se ser mais técnico. Na visão de Costa: “A significação da expressão acesso à justiça tem caráter polissêmico, relativo e conotação decorrente de uma concepção autoritária de processo em que o julgador é legitimado a decidir solitariamente” (COSTA, 2012, p. p. 74).

² CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002.

Por óbvio, o Estado deve evidenciar estratégias a fim de que o devido processo legal também ultrapasse os critérios meramente formais para ser efetivado de forma material, pensando em mecanismos de conscientização, facilitação e inclusão dos cidadãos como meio de favorecer sua participação nas demandas.

Assim, o Estado poderá, através do Poder Judiciário, garantir ao cidadão o acesso a jurisdição de forma completa e eficaz, com o intuito de promover a justiça no Estado Democrático de Direito, constituído após um regime ditatorial sem garantias fundamentais de proteção do cidadão pelo Estado.

2. Evolução histórica do acesso à justiça no Brasil

No Brasil, o acesso à justiça surgiu como direito fundamental pela primeira vez na Constituição de 1946, a qual previa que a lei não poderia excluir do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Em que pese a previsão constitucional, tal direito não se transformou em realidade para o povo brasileiro, em virtude do cenário ditatorial que predominava no Brasil³.

Dignidade da pessoa humana? Democracia? Liberdade para quem? Apesar da fundamentação do preâmbulo, na prática, o AI-5 foi o instrumento jurídico que deu aparência de legalidade e legitimidade a uma série de perseguições e medidas que violaram os mais mezinhos direitos fundamentais, tudo isso acompanhado da previsão expressa de que os Atos estariam fora do controle judicial. (BEDÊ JUNIOR, 2013)

Com a instituição do Estado Democrático de direito, a Constituição Federal de 1988, norma com superioridade hierárquica, adotou o inafastabilidade da jurisdição como direito fundamental.

Verifica-se, portanto, que a previsão constitucional de acesso a jurisdição e demais direitos fundamentais passaram a ter caráter cogente, ante a superioridade hierárquica da Constituição no Estado Democrático de Direito. Além do mais, tal norma guarda estrita compatibilidade com a democracia, tendo em vista que, neste modelo de Estado, faz-se

³ Um exemplo de como era tratado o acesso à jurisdição na Ditadura Militar: AI -2 “Art. 19 - Ficam excluídos da apreciação judicial: I - os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução e pelo Governo federal, com fundamento no Ato Institucional de 9 de abril de 1964, no presente Ato Institucional e nos atos complementares deste; II - as resoluções das Assembléias Legislativas e Câmara de Vereadores que hajam cassado mandatos eletivos ou declarado o impedimento de Governadores, Deputados, Prefeitos ou Vereadores, a partir de 31 de março de 1964, até a promulgação deste Ato.

necessária a observância dos direitos individuais, coletivos, sociais e políticos que são garantidos através do direito constitucional.

Ocorre que, posteriormente a este período [liberalismo processual] e ao fomento do constitucionalismo no século XX, alguns teóricos começaram a perceber no processo algo além de um instrumento técnico neutro, uma vez que se vislumbra neste uma estrutura democratizante de participação dos interessados em todas as esferas de poder, de modo a balizar a tomada de qualquer decisão no âmbito público. (NUNES, BARROS, 2010)

Nessa quadra, imperioso se faz mencionar que o acesso à justiça no Brasil é uma forma de proteção de todos os outros direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988, sendo que sua inobservância repercute na impossibilidade do cidadão de pleitear uma garantia constitucional que lhe é assegurada. A repartição dos poderes é mecanismo constitucional que busca assegurar a liberdade dos indivíduos, já que estes devem buscar o Judiciário para a análise de ameaça ou lesão a direito.

Por isso, o acesso à justiça não pode mais ser entendido apenas como o acesso ao Poder Judiciário, mas sim como o acesso ao devido processo legal de uma ordem jurídica justa que produza resultados individuais e socialmente justos, assegurando a efetiva garantia dos direitos constitucionais.

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição no Estado Democrático de Direito

A Constituição Federal de 1988 positivou em seu artigo 5º, inciso XXXV, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ao determinar que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, consagrou-se assim o direito fundamental ao acesso à justiça. O Estado Democrático de Direito passou a ter, então, o dever de garantir aos cidadãos a prestação jurisdicional, quando solicitado, mediante atuação do Poder Judiciário.

Ocorre que, não se pode interpretar esse princípio limitadamente, de modo que é necessário compreender que o Estado deve assegurar aos cidadãos não apenas a possibilidade de buscar o Judiciário no caso de lesão ou ameaça de direito. Deve o Estado, enquanto Democrático de Direito, em respeito a todas as normas processuais, garantir que o cidadão tenha acesso a Justiça como um todo, podendo busca-la para resolução da lide, bem como acompanhar

o deslinde do feito, daí a justificativa para a ideia de que é necessário o devido processo legal para efetivação do princípio da inafastabilidade da jurisdição⁴.

Além disso, ao garantir o acesso à Justiça sem observar o devido processo legal, sobretudo em relação a participação das partes durante todo o curso do processo, o Estado cria uma falsa impressão de observância a um princípio constitucional, sendo que não cumpre efetivamente seu papel. Com o intuito de sanar esse vício, a legislação vigente passou a buscar formas de garantir essa participação, como por exemplo, quando incentiva a autocomposição entre as partes para a resolução da lide posta à mercê da Justiça brasileira.

Contudo, as políticas autocompositivas ainda não são suficientes para efetivar a participação das partes na relação processual, pois, em que pese serem de enorme importância para o ordenamento jurídico brasileiro, é insuficiente como forma de efetivar o acesso à Justiça. Assim, nasce para o Estado a obrigação de buscar novas formas de garantir que os sujeitos processuais, durante todo o processo, possam participar e contribuir para o processo, sendo tal conduta conhecida como cooperação processual.

O princípio da cooperação processual foi consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 6º, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nota-se, portanto, que o texto normativo busca garantir a observância dos princípios processuais para a efetivação de um processo justo, célere e efetivo, de modo a garantir o acesso à jurisdição.

4. O devido processo legal como forma de garantir o acesso à Justiça

Atualmente, entende-se que o processo se desenvolve em consonância com os princípios do contraditório, ampla defesa, instrumentalidade das formas, duração razoável do processo e da inércia do Poder Judiciário, dentre outros. Assim, sob a ótica processual, o processo é ambiente discursivo interpessoal onde as partes podem efetivar os direitos fundamentais, devendo durar o tempo necessário, com respeito as garantias processuais e em ambiente participativo.

⁴ Em razão da constitucionalização dos princípios processuais, a Carta Magna passou a ser fonte objetiva de todo o sistema processual civil no país. Trata-se de uma mudança teórico-processual que renova os conceitos de jurisdição e do devido processo legal, com o intuito de assegurar a validade e legitimidade das decisões jurisdicionais proferidas no âmbito do Estado Democrático de Direito. Assim, toda decisão jurisdicional deve ser uma resultante lógico-discursiva, construída pelos interessados processuais, com vista a controlar a legitimidade dos provimentos proferidos pelo agente público julgador. (BATISTA, 2014)

As normas processuais, em especial o Código de Processo Civil, como mencionado anteriormente, sofreram reformas ao decorrer do tempo, tendo em vista que foi retirado do Estado a integralidade do controle do processo e do desenvolvimento dos atos processuais. No que tange ao Direito Processual Penal, o processo deixou de adotar o sistema inquisitivo para aderir ao sistema acusatório, o qual é caracterizado pela separação das funções de acusar, julgar e defender. Verifica-se, portanto, que as partes passaram a ter funções que antes eram atribuídas unicamente ao juiz inquisidor e isso se deu, também, pela necessidade de garantir os direitos fundamentais ao acusado.

No âmbito do Direito Processual Civil, o Estado passou a incentivar a autocomposição entre as partes e propagar políticas de conciliação, garantindo, inclusive, a isenção de custas ante a celebração de acordo entre as partes, conforme artigo 90, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Assim, com o intuito de diminuir o número de processos e dar mais celeridade a Justiça brasileira, o processo sofreu alterações de acordo com as mudanças sociais, tendo como principal modificação o incentivo do Estado para a participação das partes no processo.

Em virtude da Constituição Federal de 1988 o processo passou a ser extremamente importante, tendo o papel de solucionar os conflitos e proporcionar a paz social na medida em que normatiza as relações interpessoais por meio das decisões que emanam do Poder Judiciário. Tem-se, então, que o Estado deve estar comprometido com os valores sociais, políticos e jurídicos que também devem ser observados pelo processo enquanto ferramenta para se alcançar os objetivos ligados ao bem comum.

Verifica-se, portanto, que a atuação do Estado passou a ser imparcial, de modo a garantir a aplicação da norma geral abstrata aos casos concretos postos à mercê do Poder Judiciário, tendo em vista o princípio da inércia do Poder Judiciário. Dessa forma, o Estado deixou de exercer o papel de acusador e passou a coordenar as relações processuais, devendo se atentar a equidade das partes e impessoalidade do juízo.

Assim, a ideia de devido processo legal foi sendo construída aos poucos, em consonância com o desenvolvimento social e a atuação imparcial do Estado na resolução da lide. Hodiernamente, o devido processo legal é norma fundamental do Direito que garante que os atos processuais se realizem em conformidade à lei vigente, com os princípios e garantias sociais, motivo pelo qual a observância do devido processo legal é pressuposto básico para a garantia da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. Considerações finais

O Estado Democrático de Direito tem como finalidade coibir abusos do aparato estatal para com os indivíduos, com o intuito de garantir o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos e buscar a harmonia da convivência social. O acesso a jurisdição, enquanto princípio constitucional cogente, assegura aos cidadãos o direito de reclamar ao Estado a lesão ou ameaça de direito, para que possam buscar a solução do problema através de uma decisão jurisdicional

O acesso à justiça não está limitado apenas ao direito do cidadão de buscar a justiça para a resolução de um problema, mas também a garantir que aquele que teve seu direito lesado possa participar efetivamente do processo, de modo que possa conhecer cada fase processual, as possibilidades e o risco da ação. Tal conduta buscar busca proporcionar o acompanhamento processual em todas suas fases, pois, assim poderá contar com a garantia do devido processo legal, de modo que terá efetivado seu acesso a jurisdição, sem nenhum prejuízo ao direito adquirido por força constitucional.

Além do mais, para que seja possível alcançar o resultado pretendido, é necessário que os operadores do direito, enquanto sujeitos processuais, busquem respeitar as normas de cooperação processual, inclusive no que diz respeito a participação das partes na relação processual. Somente assim, a sociedade poderá contar com profissionais qualificados, conhecedores das normas processuais e que não apenas respeitam as disposições legais, mas que também busquem sua efetivação social.

Indubitavelmente o conhecimento é a chave para a efetivação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como do devido processo legal enquanto pressuposto para tanto. Contudo, é necessária a aplicação das normas abstratas para que seja efetivado todos os direitos garantidos aos cidadãos, para que o Estado cumpra com seu dever e não permita a inobservância de normas garantidoras, como ocorreu no período ditatorial.

Depreende-se, portanto, com base no exposto, que a observância do devido processo legal é pressuposto necessário para a efetivação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. Referências

ANTONELLI, Diego. **O Poder Judiciário durante o regime militar**. Disponível em: <https://www.plural.jor.br/colunas/fragmentos-da-historia/o-poder-judiciario-durante-o-regime-militar/>
Acesso em: 05, Out, 2023.

AMBAR, Janne. Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/principio-da-inafastabilidade-da-jurisdiacao/510996840#:~:text=%22o%20princ%C3%ADpio%20da%20inafastabilidade%2C%20assim,acesso%20%C3%A0%20justi%C3%A7a%20para%20postular>

Acesso em: 12, Out, 2023.

BARROS, Flaviane de Magalhães; NUNES, Dierle. Estudo sobre o movimento de reformas processuais macroestruturais: a necessidade de adequação ao devido processo legislativo. Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010.

BATISTA, Silvio de Sá. Decisão Jurisdicional: uma análise do art. 10 do Projeto do Novo CPC. Revista de Direito da UFV. V. 6, n. 2, jan./2014. Pag. 205 – 228.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002.

COSTA, Fabrício Veiga. MÉRITO PROCESSUAL - A formação participada nas ações coletivas. Belo Horizonte: Editora Arraes, 2012.

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 13 ed., 2017.

THEODORO JUNIOR, Humberto. **Curso de direito processual civil.** 63 ed., 2021.